



FONASA NIVEL CENTRAL
DIVISIÓN FISCALÍA
DPTO. DE ASESORÍA JURÍDICO ADMINISTRATIVA



RESOLUCIÓN EXENTA 3G N° 9549 / 2022
MAT.: DENIEGA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
FORMULADA BAJO EL FOLIO N° AO004T0004976, DE
FECHA 14 DE JULIO DE 2022.
SANTIAGO , 10/08/2022

VISTOS:

La solicitud de acceso a la información presentada con fecha 14 de julio de 2022, bajo la referencia N° AO004T0004976, por don Francisco Pérez Valdés, correo electrónico , donde se indicó que la respuesta debía efectuarse por formato electrónico o digital; la Resolución Exenta 4A/N° 2036, de fecha 19 de junio de 2014, del Fondo Nacional de Salud, que designa funcionarios responsables en materias que indica para el cumplimiento de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la información Pública y delega facultades que indica;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, mediante solicitud de acceso a la información presentada con fecha 14 de julio de 2022, bajo la referencia N°AO004T0004976, don Francisco Pérez Valdés requirió de este Servicio: *“Junto con saludarle me gustaría consultarle si las siguientes autoridades cotizan sus imposiciones de salud en Fonasa. gracias. Izkia Siches; Mario Marcel; Nicolás Grau Veloso; Marcela Alejandra Ríos Tobar; María Begoña Yarza Sáez; Marcela Hernando Pérez; Claudio Huepe Minoletti; Antonia Orellana; Antonia Urrejola Noguera; Giorgio Jackson Drago; Jeanette Vega Morales; Jeannette Alejandra Jara Román; Carlos Montes Cisternas; Juan Carlos Muñoz; Maisa Rojas Corradi; Julieta Brodsky Hernández; Maya Alejandra Fernández Allende; Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling; Marco Antonio Ávila Lavanal; Juan Carlos García Pérez de Arce; Esteban Valenzuela Van Treek; Javiera Toro Cáceres; Alexandra Benado Vergara; Flavio Salazar Onfray; Gabriel Boric; Víctor Torres Jeldes; Camilo Cid”.*

SEGUNDO. Que, el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, establece que *“son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”,* agregando que *“sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.*

TERCERO. Que, a su turno, el inciso segundo, del artículo 10 de la ley N° 20.285, sobre transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado —en adelante Ley de Transparencia—, señala que: *“El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.*

Con relación a las excepciones legales, el artículo 21, número 2, de la citada Ley de Transparencia, dispone que *“las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.*

CUARTO. Que, por otra parte, de conformidad a lo señalado en el artículo 2, de la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, que en su parte pertinente señala: *“Para los efectos de esta Ley se entenderá por: letra f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”.*

QUINTO. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la referida ley 19.628, las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo. En consecuencia, la ley establece que todos los datos personales son secretos.

SEXTO. Que, en la especie, y teniendo a la vista la definición de datos personales prevista en el artículo 2, letra f) de la ley N° 19.628 ya citada, es posible colegir que lo solicitado en vuestra presentación contiene datos personales, recolectados de fuentes no accesibles al público, cuyo tratamiento solo puede efectuarse de conformidad al artículo 4° del mismo cuerpo legal, disposición que señala de manera taxativa que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, información que además está sujeta al secreto que establece el artículo 7° de la citada ley.

SÉPTIMO. Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no cabe sino concluir que la solicitud de acceso a la información presentada con fecha 14 de julio de 2022, bajo la referencia N° AO004T0004976, habrá de ser denegada, fundado en la causal de reserva a la información establecida en el artículo 21, número 2, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y artículo 7, número 2, del Reglamento de la misma norma, en relación a los artículos 2, letra f), y 7 de la ley N° 19.628, disposiciones que permiten denegar el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente, tratándose de sus datos personales que

permitan identificar o determinar, directa o indirectamente, a su titular.

Para fundamentar esta causal, se hace presente que la información requerida, esto es, "si las siguientes autoridades cotizan sus imposiciones de salud en Fonasa. Izkia Siches; Mario Marcel; Nicolás Grau Veloso; Marcela Alejandra Ríos Tobar; María Begoña Yarza Sáez; Marcela Hernando Pérez; Claudio Huepe Minoletti; Antonia Orellana; Antonia Urrejola Noguera; Giorgio Jackson Drago; Jeanette Vega Morales; Jeannette Alejandra Jara Román; Carlos Montes Cisternas; Juan Carlos Muñoz; Maisa Rojas Corradi; Julieta Brodsky Hernández; Maya Alejandra Fernández Allende; Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling; Marco Antonio Ávila Lavanal; Juan Carlos García Pérez de Arce; Esteban Valenzuela Van Treek; Javiera Toro Cáceres; Alexandra Benado Vergara; Flavio Salazar Onfray; Gabriel Boric; Víctor Torres Jeldes; Camilo Cid", constituye un dato personal al tratarse de información concerniente a personas naturales identificadas o identificables.

En efecto, al señalar si las personas por las que se consulta cotizan o no sus imposiciones de salud en Fonasa, implica determinar el sistema de salud al que se encuentran adscritas, información respecto de la cual el Consejo para la Transparencia ha resuelto en diversos pronunciamientos, v. gr. C4565-17, que "los antecedentes sobre el sistema de salud de una persona distinta del requirente son reservados por cuanto su divulgación afecta los derechos de las personas titular de dicho dato". En este sentido, el mismo Consejo en la decisión C7442-20 señaló que "...este Consejo no advierte un verdadero interés público que justifique una intromisión como la pretendida por el requirente, toda vez que no se aprecia cuál sería el beneficio público que conllevaría la publicidad de información sobre la afiliación de determinados funcionarios a una determinada Institución de Salud y que habilite afectar la privacidad de los titulares de los datos requeridos...", razonamiento que debe relacionarse con lo resuelto por el mismo órgano en la causa Rol C707-20, en la que expresó "(...) el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario".

De esta manera, el FONASA se encuentra impedido de dar a conocer la información solicitada, encontrándose dentro del supuesto contemplado en el N° 2, del artículo 21, de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en relación con la letra f), del artículo 2 de la citada norma legal.

Finalmente, es dable señalar que lo razonado en los párrafos precedentes se ajusta plenamente a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 No. 4, de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas la protección de sus datos personales, y que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República; el artículo 21, núm. 2, de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la información pública; el artículo 7 núm. 2, del Decreto Supremo N° 13, de 2.009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; artículos 2, letra f), y 7, de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; el artículo 61, letra h), del D.F.L. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; las facultades establecidas en los artículos 52 y siguientes del Libro I del D.F.L. N° 1/2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 2763, de 1979 y de las Leyes Nos. 18.933 y 18.469, ambas del Ministerio de Salud; Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Exenta 4A/N° 2036, de fecha 19 de junio de 2014, del Fondo Nacional de Salud, que designa funcionarios responsables en materias que indica para el cumplimiento de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la información Pública; Resolución Exenta 4A/N° 28, de fecha 20 de marzo de 2019, que establece la nueva estructura y organización interna del Fondo Nacional de Salud y delega facultades que indica y sus modificaciones posteriores; y lo establecido en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, dicto lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

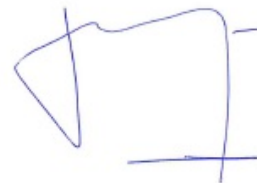
1. DENIÉGASE la solicitud de acceso a la información presentada con fecha 14 de julio de 2022, bajo la referencia N° AO004T0004976.

Se cumple con informar que vencido el plazo legal que este Servicio tiene para la entrega de la información, o denegada ésta, la requirente tiene derecho a impugnar el presente acto administrativo, recurriendo ante el Consejo para la Transparencia, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, conforme lo establece el artículo 24 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, reclamación que deberá presentarse dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de esta resolución.

2. Notifíquese la presente resolución al solicitante por correo electrónico.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

"Por orden del Director"



**JUAN FUENTES DIAZ
JEFE(A) SUBROGANTE
DIVISIÓN FISCALÍA**

SR. FRANCISCO PÉREZ VALDÉS, CORREO ELECTRÓNICO
SUBDPTO. DE TRANSPARENCIA Y LEY DE LOBBY
DPTO. DE ASESORÍA JURÍDICO ADMINISTRATIVA
SUBDPTO. OFICINA DE PARTES

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2 y 3 de la Ley 19.799. Validar número de documento en www.fonasa.cl

yvP8qtIB

Código de Verificación

